

República de Colombia  
Rama Judicial



Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Santiago de Cali, quince (15) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

<b>RADICACIÓN:</b>	76001-23-33-000-2022-00697-00
<b>MEDIO DE CONTROL</b>	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – OTROS ASUNTOS
<b>ACCIONANTE:</b>	JHON JAIR SEGURA TOLOZA <sup>1</sup>
<b>ACCIONADO:</b>	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP <sup>2</sup>
<b>TEMA</b>	MODIFICACIÓN DE ESQUEMA DE SEGURIDAD
<b>DECISIÓN</b>	ADMITE DEMANDA -LEY 2080 DE 2021 <sup>3</sup>
<b>AUTO INTERLOCUTORIO</b>	292

**MAGISTRADO PONENTE: EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS**

**I. ANTECEDENTES.**

El señor Jhon Jair Segura Toloza, por conducto de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA, presentó demanda contra la Unidad Nacional de Protección -UNP-, la cual fue inadmitida a través de la providencia del 24 de agosto de 2022, y en el escrito de subsanación formuló las siguientes pretensiones:

*“1} Conforme a lo esbozado por su despacho, es de aclarar que lo que se busca a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es que se declare nula la respuesta otorgada por la Unidad Nacional de Protección a través de oficio 22- 0001-4309, fechado 31 de marzo de 2022, mediante el cual se da respuesta al derecho de petición del 28 de enero de 2022;*

*2} como consecuencia de lo anterior, se solicita que la UNP, convoque al comité CERREM, en aras de realizar un nuevo estudio de riesgo al señor JHON JAIR SEGURA TOLOZA, dejando sin efectos los actos administrativos demandados”.*

Por otro lado, manifestó que “renuncia a cualquier tipo de retribución económica”.

**II. CONSIDERACIONES.**

De la jurisdicción y competencia.

**Factor funcional y cuantía**

Conforme a los artículos 104 y 152 del CPACA, la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer además de lo

<sup>1</sup> jhonjair220@hotmail.com

<sup>2</sup> notificacionesjudiciales@unp.gov.co

<sup>3</sup> Acta de Reparto – 8 de junio de 2022.

dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos administrativos, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa, con base en la siguiente competencia asignada a los Tribunales Administrativos “*numeral 2º De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes...*”. Atendido las pretensiones de la demanda se dará aplicación al numeral 22 del artículo 152 Ib. “*De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía contra actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional o departamental, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden.*”, toda de vez que la parte actora no formuló pretensiones de contenido económico.

En el presente asunto, se pretende la declaratoria de nulidad del oficio 22-001-4309 del 31 de marzo de 2022, por medio del cual le indicó al demandante que no era susceptible la conformación del comité CERREM<sup>4</sup> para recomendar la implementación, ajuste o finalización de medidas de prevención y protección puesto que el señor Jhon Jair Segura Toloza cuenta con el esquema de protección concedido a través de una medida cautelar ordenada por el Consejo de Estado, en el trámite de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, y dicho esquema de seguridad no se derivó de la recomendación impartida por el comité CERREM – Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendaciones de Medidas.

Ahora bien, en las pretensiones de la demanda el actor precisó su renuncia alguna retribución económica derivada del control de legalidad del acto acusado, la competencia radica en esta Corporación.

Cabe destacar que el factor objetivo de atribución de competencia se ha definido como el valor que representa lo perseguido con una demanda, esto es, su significación económica inmediata.

Por su parte, la Corte Constitucional en la sentencia C-040 de 1999<sup>5</sup>, consideró que la cuantía puede fijarse a través de los siguientes sistemas: **i) juris et de jure**<sup>6</sup>, **ii)** dejar su valoración a criterio del juez, **iii)** confiar en la voluntad de las partes, y **iv)** prever un procedimiento previo para probarla, ante lo cual se concluyó que nuestro sistema judicial “*ha optado por combinarlos, pero dándole prelación a la posibilidad de dejar su cálculo a la voluntad de las partes*”<sup>7</sup>(...).

<sup>4</sup> Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendaciones y Medidas – CERREM-

<sup>5</sup> C. Const. Sent. C-040 ene. 26/2000 M.P. Fabio Morón Díaz.

<sup>6</sup> Presunción absoluta, de hecho y de derecho.

<sup>7</sup> «La competencia de los jueces en algunos casos queda determinada de acuerdo con la cuantía de los negocios, la que aprecian los demandantes al proponerlos, pues, es una forma aceptable y que por lo menos permite obviar las dificultades que se presentarían con otra diferente, fuera de que aquellos están en mejores condiciones de apreciar el monto de sus pretensiones.». GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, Julio, Institución Procesal Civil Colombiana, Editorial Teoría, Medellín 1946, página 87.

Así pues, el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011 al referirse a la competencia por razón de la cuantía en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previó que:

*"ARTÍCULO 157. COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. <Artículo modificado por el artículo 32 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de la competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ella pueda considerarse la estimación de los perjuicios inmateriales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen.*

*La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, que tomará en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, causados hasta la presentación de aquella.*

*Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.*

*En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, **no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.***

*En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.*

**PARÁGRAFO.** *Cuando la cuantía esté expresada en salarios mínimos legales mensuales vigentes, se tendrá en cuenta aquel que se encuentre vigente en la fecha de la presentación de la demanda." (Negrilla de fuera de texto legal).*

De lo anterior, se desprende que en el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es un **deber procesal** de la parte demandante realizar la estimación razonada de la cuantía, a tal punto que no puede prescindir de ella so pretexto de renunciar al restablecimiento del derecho, tal como se advirtió al momento de analizar ampliamente este requisito en la providencia que inadmitió la demanda y precisó su renuncia alguna retribución económica.

### **Conciliación extrajudicial.**

Teniendo en cuenta que la conciliación extrajudicial es un requisito de procedibilidad tal como lo consagra el numeral 1º del artículo 161 del CPACA: "Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales."

Por lo anterior y al tratarse de un asunto donde se formulan pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, se encuentra agotado este presupuesto, según da cuenta la constancia expedida por el Ministerio Público, fechada 6 de junio de 2022 visible en el expediente virtual, donde se indica que la solicitud fue radicada el 7 de abril de 2022<sup>8</sup>.

### **Caducidad del medio de control.**

Respecto de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA dispone: *"2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (...) d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales."*

Ahora bien, el acto administrativo objeto de control de legalidad contenido en el oficio 22-001-4309 del 31 de marzo de 2022, fue notificado el 1 de abril de 2022 al buzón electrónico autorizado por el señor Jhon Jair Segura Toloza ([jhonjair220@hotmail.com](mailto:jhonjair220@hotmail.com))<sup>9</sup>, y presentó la solicitud de conciliación ante el Ministerio Público el día 7 de abril de 2022 posteriormente y ante la falta de ánimo conciliatorio se expidió la respectiva acta el día 6 de junio de 2022<sup>10</sup> y la demanda fue presentada ante los Juzgados Administrativos de este Circuito Judicial, el día 8 de junio de 2022<sup>11</sup>, de lo anterior se desprende que la demanda fue presentada cuando había transcurrido 6 días, teniendo en cuenta que se suspendieron los términos de caducidad entre el período comprendido entre el 7 de abril a 6 junio de 2022, en virtud de la conciliación prejudicial adelantada<sup>12</sup>.

Así las cosas, la demanda fue presentada dentro los cuatro (4) meses siguientes a su notificación, esto es el 8 de junio de 2022, teniendo en cuenta que los términos empezaron a correr a partir del 2 de abril de 2022 y la suspensión del conteo ante el trámite de conciliación prejudicial.

### **De la legitimación en la causa por activa y pasiva.**

En relación con la legitimación por activa, se tiene a esta como la posibilidad que tiene aquella persona que ha sufrido un daño para obtener el resarcimiento por medio de la jurisdicción contenciosa administrativa.

---

<sup>8</sup> Folios 11 a 13 archivo 1 expediente digital.

<sup>9</sup> Folio 17 archivo 1 expediente digital.

<sup>10</sup> Folio 12 archivo 10 expediente digital.

<sup>11</sup> Folio 154 archivo 1 expediente digital.

<sup>12</sup> Conforme a lo consagrado en el Art. 21 de la Ley 640 de 2001 y el Art. 3 del Dcto 1716 de 2009, el término de caducidad estará suspendido a partir de la radicación de la solicitud de conciliación.

Respecto al derecho de postulación, el artículo 160 del CPACA señala que: *"Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa."*; y en los anexos de la demanda contenidos en el expediente digital, obra poder otorgado por el señor Jhon Jair Segura Toloza al abogado Carlos Arturo Herrera Torres.

Sobre este punto, cabe destacar que las actuaciones en lo sucesivo deben surtir por conducto del apoderado y no a través de los escritos formulados por la parte actora, atendiendo lo dispuesto en la norma citada.

Frente a la legitimación y la representación de las entidades públicas el artículo 159 del CPACA dispone: *"Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados."*

Bajo las condiciones en que se planteó la demanda y la descripción fáctica la parte actora hace imputaciones contra la Unidad Nacional de Protección refutando así el acto administrativo objeto de controversia fue expedido por dicha entidad.

### **Requisitos formales y de procedibilidad.**

La demanda cumple con los requisitos establecidos en los artículos 162 (requisitos de la demanda<sup>13</sup>) 163 (individualización de pretensiones) y 164 (oportunidad de la demanda) de la Ley 1437 de 2011.

Además, el demandante envió la demanda y sus anexos a la contraparte<sup>14</sup>, al tenor de lo previsto en el inciso 4 del artículo 6 del Decreto 806 de 2020 en concordancia con numeral 8 del artículo 162 del CPACA adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021 *"El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados"*, según se observa en el expediente virtual.

### **De la medida cautelar de urgencia**

Ahora bien, la parte actora, solicitó el trámite de la medida cautelar de urgencia<sup>15</sup> con el fin de que conceda adición a su grupo familiar del esquema de seguridad tipo 4. Al respecto, cabe precisar que el artículo

---

<sup>13</sup> Designación de las partes, pretensiones, hechos y omisiones, fundamentos de derecho y concepto de violación, pruebas, estimación razonada de la cuantía y dirección de notificación de las partes

<sup>14</sup> Folio 155 archivo 1 expediente digital.

<sup>15</sup> Folios 149 a 153 archivo 1

233 del CPACA<sup>16</sup> establece el procedimiento para la adopción de las medidas cautelares.

En relación con las medidas cautelares de urgencia, el artículo 234 *ibidem* dispone lo siguiente:

*(...) Artículo 234. Medidas cautelares de urgencia. Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar.*

*La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución señalada en el auto que la decreta (...)*

Sobre el particular el Consejo de Estado<sup>17</sup>, ha señalado los parámetros de lo que debe entenderse por urgencia, así:

*“11. El artículo 234 antes transcrito no prevé una definición de lo que debe entenderse por «urgencia», no obstante esta Corporación ha dicho que la expresión alude al «inminente riesgo de afectación de los derechos del interesado», lo que puede manifestarse en (i) la imposibilidad de ejecutar la sentencia si no se impone una medida provisional urgente, (ii) el posible acaecimiento de un perjuicio irremediable o (iii) la concreción de un peligro inminente. Estas situaciones conducen a que la intervención judicial resulte impostergable, pues incluso el decreto de la cautela por la vía ordinaria podría hacer inane la efectividad de la sentencia.*

*12. Además, se destaca que la facultad que le confiere al juez el trámite de urgencia previsto en la mencionada norma es de carácter excepcional toda vez que limita el derecho a ser oído que comúnmente*

---

<sup>16</sup> “La medida cautelar podrá ser solicitada desde la presentación de la demanda y en cualquier estado del proceso.

El Juez o Magistrado Ponente al admitir la demanda, en auto separado, ordenará correr traslado de la solicitud de medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre ella en escrito separado dentro del término de cinco (5) días, plazo que correrá en forma independiente al de la contestación de la demanda.

Esta decisión, que se notificará simultáneamente con el auto admisorio de la demanda, no será objeto de recursos. De la solicitud presentada en el curso del proceso, se dará traslado a la otra parte al día siguiente de su recepción en la forma establecida en el artículo 108 del Código de Procedimiento Civil.

El auto que decida las medidas cautelares deberá proferirse dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término de que dispone el demandado para pronunciarse sobre ella. En este mismo auto el Juez o Magistrado Ponente deberá fijar la caución. La medida cautelar solo podrá hacerse efectiva a partir de la ejecutoria del auto que acepte la caución prestada.

Con todo, si la medida cautelar se solicita en audiencia se correrá traslado durante la misma a la otra parte para que se pronuncie sobre ella y una vez evaluada por el Juez o Magistrado Ponente podrá ser decretada en la misma audiencia.

Cuando la medida haya sido negada, podrá solicitarse nuevamente si se han presentado hechos sobrevinientes y en virtud de ellos se cumplen las condiciones requeridas para su decreto. Contra el auto que resuelva esta solicitud no procederá ningún recurso.

<sup>17</sup> C. E. S. Segunda. Sub. B, Auto jul 7/2021 Rad. 2021-00385-00 M.P. William Hernández Gómez.

le asiste a la parte demandada antes de que se provea sobre la medida cautelar.

13. Visto lo anterior, es plausible concluir que la figura objeto de estudio se justifica en términos de tiempo y de proporcionalidad. Así, en tratándose de las medidas cautelares de urgencia, el único motivo por el que debe ceder el derecho de audiencia de la parte demandada es la absoluta inminencia y gravedad de la transgresión que aquella busca evitar, bajo el entendido que el trámite que ordinariamente debe impartirse no proporciona la celeridad requerida para garantizar una justicia oportuna y, con ello, efectiva.

14. Sobre el concepto de urgencia en el derecho administrativo, la doctrina española<sup>18</sup> ha señalado lo siguiente:

*[...] es la insuficiencia del Derecho administrativo normal para la consecución de un interés público legal el fundamento de la utilización de las instituciones de urgencia. Sin embargo, hay que añadir algo más específico para que se matice debidamente entre la urgencia y otras figuras afines. La insuficiencia ha de ser por razón del tiempo; esto es, la causa por la cual la institución o procedimiento administrativo normal no sirve para alcanzar el fin perseguido ha de ser el tiempo. La utilización de la institución excepcional de urgencia va a alcanzar la misma meta que jurídicamente se podría alcanzar con la institución normal administrativa. Lo que ocurre es que aquella la alcanzará en un lapso de tiempo en el que el derecho normal no podría nunca alcanzarla, y ese lapso breve de tiempo era esencial para el fin administrativo propuesto [...]*

15. Por último, es importante anotar que como el uso de la urgencia en las medidas cautelares implica el ejercicio de una facultad judicial excepcional a la que va aparejada la merma de las garantías de la parte demandada, el deber de motivación para justificar la adopción de este trámite extraordinario se intensifica no solo para el juez que es el llamado a resolverla, sino también para el demandante cuando se estudia su procedencia a petición de parte. En ese sentido, para su adopción debe acreditarse suficientemente la inminencia e impostergabilidad de la medida en relación con el trámite que normalmente ha previsto el ordenamiento jurídico para proveer esta tutela."

A su vez, el demandante aportó con el escrito de demanda la denuncia formulada ante la Fiscalía General de la Nación el día 10 de mayo de 2022, en el que manifestó que su vida y la de su familia corre riesgo y requiere que se implemente el esquema de seguridad tipo 4, al afirmar que en calidad de líder social ha sido víctima de amenazas por parte de grupos al margen de la ley "ELN"<sup>19</sup>.

Es importante destacar que en la actualidad el señor Jhon Jair Segura Toloza, cuenta con un esquema de seguridad, ordenado a través de una medida cautelar decretada por el Consejo de Estado dentro del proceso

---

<sup>18</sup> Clavero Arévalo, Manuel Francisco, "Ensayo de una teoría de la urgencia en el derecho administrativo," Revista de Administración Pública, n° 10, Madrid, 1953, p. 30.

<sup>19</sup> Folios 47 a 61 archivo 1

de nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 11001-03-24-000-2019-00211-00.

En estas condiciones, y teniendo en cuenta que en la actualidad el demandante cuenta con esquema de seguridad el cual es objeto de conocimiento del Consejo de Estado, y pretende ampliar dicho esquema, no se advierte de que deba adoptarse una decisión que amerite la impostergable intervención judicial sin garantía del derecho de defensa de la entidad demandada.

Lo anterior, sin desconocer que es un asunto de la mayor relevancia y trascendencia constitucional que, en armonía con lo afirmado por el demandante, amerita un pronunciamiento para que, en caso de resultar procedente, se ordenen, provisionalmente, las medidas necesarias para proteger el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Sin embargo, estima el despacho que, por los motivos señalados, esta finalidad puede alcanzarse con el procedimiento normal que contempla el artículo 233 del CPACA para este tipo de cautelas, sin la restricción del derecho a ser oído de que goza la parte demandada.

En efecto, se negará el trámite de urgencia de la solicitud de medida cautelar para, en su lugar, disponer que se imparta el procedimiento que ordinariamente se les da a aquellas y las mismas deben acompasarse con las pretensiones de la demanda.

En consecuencia, después del estudio realizado, se

### III. RESUELVE:

**Primero:** Admitir la demanda de instaurada por el señor Jhon Jair Segura Toloza contra la Unidad Nacional de Protección UNP.

**Segundo:** Notificar este auto al demandante en la forma prevista en el artículo 201 del CPACA modificado por el artículo 50 de la Ley 2080 de 2021, quien podrá consultarlo en la página web: [www.ramajudicial.gov.co](http://www.ramajudicial.gov.co) o en el aplicativo Samai.

**Tercero:** Notificar personalmente la presente providencia a la parte demandada UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN y a la AGENCIA NACIONAL DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO a los buzones de correo electrónico creados por dichas entidades para efecto de recibir notificaciones judiciales, de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 198 y 199 del CPACA, éste último modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 del 2021 “Por medio de la cual se reforma el CPACA”.

**Cuarto:** A la entidad demandada UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN, al AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO y a la AGENCIA NACIONAL DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, se les correrá traslado de esta demanda por el término de treinta (30) días para contestarla, proponer

excepciones, pedir pruebas, llamar en garantía y en su caso, proponer demanda de reconvencción, acorde con el artículo 172 del CPACA. Este plazo comenzará a contabilizar a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje, y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente, de conformidad con lo establecido en el inciso 4° del artículo 48 de la Ley 2080 de 2021 que modificó el artículo 199 del CPACA.

**Quinto:** Advertir a la parte demandada que, durante el tiempo para dar respuesta a la demanda, deberá allegar con la contestación el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación que se demanda y se encuentre en su poder. La inobservancia de este deber constituye falta disciplinaria gravísima del funcionario encargado del asunto (artículo 175, parágrafo 1° del CPACA).

**Sexto:** Negar el trámite de urgencia de la medida cautelar de urgencia solicitada. En su lugar, impartir a dicha petición el procedimiento ordinario que consagra el artículo 233 del CPACA, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**Séptimo: ADVERTIR** a los sujetos procesales, que los documentos o memoriales que pretenda incorporar a la actuación deben ser remitidos al correo electrónico: **rpmemorialestadmvc Cauca@cendoj.ramajudicial.gov.co**, y la **ventanilla virtual** en la plataforma SAMAI (<https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8087/>) con copia a los correos electrónicos de los demás sujetos procesales., señalando en el asunto del mismo los datos del proceso (número de radicado veintitrés dígitos separados por guion, las partes y el magistrado ponente), cualquier memorial y/o documento que sea enviado a un buzón diferente al informado con anterioridad no será tenido en cuenta, asumiendo las consecuencias desfavorables en el incumplimiento de observar dicho deber<sup>20</sup> artículos 2 Decreto 806 de 2020, Ley 2213 de 2022<sup>21</sup> y 186 CPACA.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Consejero Ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ. Auto del 7 de febrero de 2022. Radicación No.: 11001031500020210406500 (5922).

<sup>21</sup> "Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones".

<sup>22</sup> C. E. S. Segunda. Auto Rad. 2017-00165-01 mar. 03/2022 Rocío Marín Jaramillo. "En primer lugar, de manera reciente, esta corporación ha tenido la oportunidad de analizar algunos casos en que las partes procesales han enviado memoriales o documentos a correos electrónicos diferentes a los oficiales habilitados por las autoridades judiciales, así: De la jurisprudencia en cita, se precisa que **I)** cualquier correo electrónico por el hecho de ser institucional no es apto para la recepción y trámite de los memoriales, porque ello, generaría un caos en la administración de justicia y una carga desproporcionada de verificar si las partes se pronunciaron en otro buzón digital; **II)** los sujetos procesales tienen la carga de utilizar como medio de comunicación la dirección electrónica establecida oficialmente para tales efectos por el juzgado o el órgano judicial colegiado respectivo, porque de no ser así esto entorpecería la prestación adecuada del servicio público y afectaría los principios de seguridad jurídica, eficiencia, celeridad y economía procesal y; **III)** los memoriales que se radiquen en un buzón electrónico distinto al que fue destinado para su recepción, y que ha sido debida y previamente informado a las partes, deben tenerse por no presentados."

De igual forma, las partes informarán el canal digital elegido para surtir las actuaciones y notificaciones del presente asunto. En su defecto se tomarán como tales los correos electrónicos que obran en el proceso y en el SIRNA.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

(Firmado electrónicamente)  
**EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS**  
**Magistrado**